



47 91  
AMPARO EN REVISIÓN: 6191/83  
JORGE CORREA M. Y OTRA.

PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO: MANUEL GUTIERREZ DE VELASCO.  
SECRETARIO: LIC. OSCAR HERNANDEZ PERAZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal  
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corres-  
pondiente al día quince de octubre de mil novecientos --  
ochenta y cinco.

VISTOS:

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el diez de -  
junio de mil novecientos ochenta y dos, del que conoció  
el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en  
el Distrito Federal, Jorge Correa M. y Adela Lapuente -  
de Correa, por su propio derecho, solicitaron el amparo  
y la protección de la Justicia Federal contra las auto-  
ridades y por los actos que a continuación se indican:

§ "a).- Del H. Congreso de la Unión, reclamamos  
la inconstitucionalidad de la discusión, aprobación y -  
expedición del artículo 66 de la Ley de Hacienda del De-  
partamento del Distrito Federal, publicado por decreto  
en el Diario Oficial del treinta y uno de diciembre de  
mil novecientos setenta y cinco."

  
Cotejado:

"b).- Del C. Presidente de los Estados Unidos  
Mexicanos, reclamamos la inconstitucionalidad de la --

promulgación, publicación y ejecución del artículo 66 - de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada mediante decreto en el Diario Oficial del treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco."

"c).- Del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, del C. Secretario de Gobernación y del C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, reclamamos la inconstitucionalidad del refrendo que realizaron del decreto del presidente de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial del treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, por lo que se refiere al artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, en virtud de que dicho precepto es inconstitucional y por tanto, también lo es el refrendo de las responsables indicadas en este apartado; igualmente reclamamos la inconstitucionalidad de todos y cada uno de los actos que hayan realizado o ejecuten, fundándose en el precepto cuya inconstitucionalidad se reclama, en perjuicio de nuestros intereses o derechos constitucionales."

"d).- De los C.C. Tesorero del Distrito Federal; director de la Dirección de Catastro y Contribuciones a la Propiedad Raíz; director de Catastro e Impuesto Predial; jefe del Departamento de Liquidación y Giro; - del subtesorero del Departamento del Distrito Federal, - reclamamos la inconstitucionalidad de todos y cada uno



de los actos que hayan realizado o realicen en perjuicio de los suscritos, aplicándonos el artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, cuya inconstitucionalidad se reclama, y en especial, la notificación de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta, que como primer acto de aplicación efectúan las responsables en perjuicio de los suscritos, por medio de la cual se nos hace saber la práctica del avalúo registro [REDACTED] de fecha doce de mayo de mil novecientos ochenta, respecto del inmueble de nuestra propiedad, ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] fundándose dicha notificación en el mencionado artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, mencionado en el inciso a) de este apartado, disposición que se impugna mediante el presente juicio de garantías, liquidando, por ende, en la multicitada notificación, el importe del impuesto predial para ser pagado a partir del sexto bimestre del año de mil novecientos ochenta."

§ "e).- De todas las autoridades señaladas como responsables en los incisos anteriores, reclamamos la inconstitucionalidad de todos y cada uno de los actos que dichas responsables hayan realizado, aplicando en nuestro perjuicio el artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, disposición cuya inconstitucionalidad se reclama, en la inteligencia que,

el primer acto de aplicación del citado precepto se --  
efectúa en virtud de la multimencionada notificación -  
da fecha veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta,  
misma que, para los efectos del artículo 21 de la -  
Ley de Amparo vigente, fué hecha el día veinte de mayo  
de mil novecientos ochenta y dos."

"f).- De todas y cada una de las autoridades  
señaladas como responsables en los incisos que anteceden,  
reclamamos la inconstitucionalidad de todos y cada  
uno de los actos que en nuestro perjuicio efectúan  
dichas responsables, y que hayan tenido o tengan origen  
en los actos anteriormente reclamados o se deriven de  
ellos."

SEGUNDO.- Los promoventes del juicio de amparo  
narraron como antecedentes de los actos reclamados -  
lo siguiente:

"1.- Los suscritos somos causantes del impuesto  
predial correspondiente, respecto de la casa ubicada  
en [REDACTED]

[REDACTED] dado que somos  
coopropietarios de dicho bien inmueble, situación legal  
que reconoce la Dirección de Catastro y Contribuciones  
a la Propiedad Raíz, según se demuestra con la notifi--  
cación de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos  
ochenta; que fué hecha el día veinte de mayo de mil no-  
vecientos ochenta y dos a los suscritos, licenciado Jorge  
Correa Martínez por su propio derecho y en represen-  
tación de su coopropietario."



"2.- Con fecha veinte de mayo de mil novecien-  
tos ochenta y dos, fuimos notificados de la resolución  
del C. Director de Catastro y Contribuciones a la Pro-  
piedad Raíz, de fecha veintiuno de octubre de mil nove-  
cientos ochenta, a la cual me referí en el inciso d) del  
apartado correspondiente a los actos reclamados de esta  
demanda, resolución que se refiere a la práctica del --  
avalúo registro [REDACTED] que con fecha doce de mayo de --  
mil novecientos ochenta, se hiciera con fundamento en e  
el artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento --  
del Distrito Federal, cuya inconstitucionalidad se re-  
clama, al inmueble de nuestra propiedad ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] inmueble  
respecto del cual somos causantes del impuesto pre-  
dial correspondiente."

"Como se dijo, la notificación de referencia  
procede de la Tesorería del Distrito Federal, Dirección  
de Catastro y Contribuciones a la Propiedad Raíz, docu-  
mento que desde luego, anexamos a la presente demanda -  
de garantías."

TERCERO.- Los peticionarios del amparo esti-  
ma vulneradas las garantías individuales que consa-  
gran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el nu-  
meral 31, fracción IV, del mismo Código fundamental de  
la República, por los conceptos de violación que hicie-  
ron valer como sigue:

"1.- Las autoridades señaladas como responsables en la presente demanda de garantías, al efectuar los actos que las mismas se reclaman, aplican en nuestro perjuicio por vez primera el artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal cuya inconstitucionalidad se reclama, dado que, al determinarse el impuesto predial correspondiente al inmueble al cual nos hemos referido en esta demanda (impuesto que se liquida en la multicitada notificación que también se impugna) teniendo como base el avalúo efectuado por la Tesorería del Distrito Federal, se viola lo dispuesto por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución federal, disposición que exige que las contribuciones (impuestos) se establezcan en leyes que cumplan con las formalidades respectivas, y como consecuencia de ello, se viola también en nuestro perjuicio el principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, violaciones que dan motivo para que se nos conceda el amparo solicitado."

"En efecto, la fracción IV del artículo 31 de la Constitución federal, preceptúa como obligación de los mexicanos la de "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado o Municipio en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Del precepto transcrito se concluye claramente que las contribuciones (que los impuestos) -- deben estar siempre fijados y establecidos por leyes --



82 34

(ello como seguridad a los causantes) es decir, - - - - -  
que el sujeto, el objeto, la base y la tasa de un impues  
to, se fije y determine por la propia ley."

"En la especie, el artículo 66 de la Ley de -  
Hacienda del Departamento del Distrito Federal, cuya --  
inconstitucionalidad se reclama juntamente con los actos  
en los cuales se aplique dicha disposición, deja manos -  
libres y faculta a la Tesorería del Distrito Federal pa-  
ra determinar la base del impuesto, conforme al avalúo -  
que practique a su arbitrio dicha autoridad administrati-  
va, mismo que determina la aplicación de la tasa del im-  
puesto, situación ésta que resulta prohibida por la frac-  
ción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna, ya que -  
la cuantificación de la significación económica del hecho  
generador del crédito fiscal, la determina una autoridad  
administrativa (Treasurería del Distrito Federal, Dirección  
de Catastro y Contribuciones a la Propiedad Raíz) y no la  
ley como debiera."

"En efecto, el principio de legalidad consagra-  
do en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución  
federal exige que la ley que establezca un tributo, de-  
fina los elementos y supuestos de la obligación tributa-  
ria para que el sujeto pasivo pueda conocer en todo --  
tiempo y en forma cierta, cómo ha de contribuir para los  
gastos públicos, circunstancia que no repeta al precep-  
to combatido, ya que permite que la fijación del valor  
catastral de los predios y por tanto la base gravable

del impuesto, quede a la discreción y arbitrio de la Tesorería del Distrito Federal en el avalúo que se practica para determinarlo."

"Siendo inconstitucional por los razonamientos expuestos, el mencionado artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, resultan por consecuencia, también inconstitucionales el refrendo de las autoridades señaladas como responsables a las que nos referimos en el capítulo correspondiente, los actos de aplicación que señalamos como reclamados en esta demanda, siendo uno de ellos, el avalúo y la determinación del monto de la base del impuesto que nos han sido notificados, dado que como quedó dicho, se ha violado en nuestro perjuicio la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna y como consecuencia, los artículos 14 y 16 de dicho ordenamiento jerárquico."

"Resulta aplicable al caso que nos ocupa la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe, publicada en el informe rendido a dicho alto tribunal al terminar el año de 1976, primera parte, Pleno; páginas 482 y 483:"

"PREDIAL, EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1974, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE CONSAGRA EL ARTICULO 31, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION FEDERAL, EN CUANTO AL SISTEMA DE VALUACION DE PREDIOS QUE ESTABLECE PARA LOS EFECTOS DEL





IMPUESTO. - Tomando en consideración que el artículo 36, fracción I, de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, dispone que la base del impuesto predial lo es el valor catastral del predio, y el artículo 66 de dicho ordenamiento legal, reformado por Decreto de 21 de noviembre de 1974, publicado, en el Diario Oficial del 13 de diciembre de ese mismo año, establece que en tratándose de predios ya valuados que no hayan sufrido modificaciones, no se requerirá valuación de los peritos valuadores de la Tesorería, sino que bastará aplicar los nuevos valores unitarios de tierra y de construcción que la propia Tesorería apruebe para regir en el ejercicio fiscal correspondiente. Resulta evidente que este último deja en manos de la referida autoridad exactora, la facultad de fijar el valor catastral de los predios antes mencionados a su discreción y en consecuencia, la determinación de la base gravable del propio impuesto predial, elemento esencial de éste. Es decir, si la Tesorería -- del Distrito Federal tiene la facultad de fijar cada dos años los valores unitarios de tierra y de construcción, y éstos son los que deben aplicarse para actualizar los valores catastrales de predios ya valuados, que no hayan sufrido modificaciones, es incuestionable que bastará con que fije a su arbitrio dichos valores pues no se señala base alguna para hacerlo, para que también a su arbitrio fije el valor catastral de los inmuebles -- que se encuentran en esas condiciones y con ello, la

base gravable del tributo en tanto que, como se acaba de precisar, el citado valor catastral constituye la base gravable del impuesto; además, por vía de consecuencia, el sistema del artículo 66 combatido deja en manos de la propia autoridad exactora la fijación, en cada caso concreto, de la cuota o tarifa de dicho tributo, también elemento esencial de este, porque como el artículo 41 de la propia Ley de Hacienda citada establece una tarifa de tasa progresiva, en relación con el valor catastral que se asigna a cada predio, es inconcuso que si la autoridad exactora desea gravar en mayor cantidad a un predio en particular, bastará con que le señale un valor catastral que corresponda al renglón de la tarifa respectiva para que lo logre; por lo tanto, el citado artículo 66, reformado, de la mencionada Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal viola el principio de legalidad que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal y por ende, la garantía de legalidad que en favor del gobernado tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales."

"Amparo en revisión 331/76. María de los Angeles Prendes de Vera. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos."

"Amparo en revisión 5332/75. Blanca Meyerberg de González. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos."

"Amparo en revisión 5464/75. Ignacio Rodríguez Treviño. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos."



SA 196

"Amparo en revisión 5888/75. Inmobiliaria Havre, S. A. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos."

"Amparo en revisión 1008/76. Antonio Hernández Abarca. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos."

"2.- La multicitada resolución de la Tesorería del Distrito Federal, Dirección de Catastro y Contribuciones a la Propiedad Raíz, contenida en la notificación de fecha 21 de octubre de 1980, efectuada, según se ha demostrado, el día 20 de mayo de 1982, notificación que se encuentra debidamente señalada en el apartado correspondiente como acto reclamado, viola en perjuicio de los suscritos lo que dispone en nuestro beneficio el artículo 14 de la Constitución federal, dado que en dicha notificación efectuada como se dijo el día 20 de mayo de 1982, se nos liquida el monto del nuevo impuesto a pagar a partir del sexto bimestre del año de 1980, precisamente en la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] liquidación que al pretenderse hacer efectiva a partir del sexto bimestre del año de mil novecientos ochenta, resulta a todas luces retroactiva en virtud de que, repetimos, la notificación de referencia nos fué hecha el día 20 de mayo de 1982, -- aplicación retroactiva de las disposiciones en las que pretende fundamentarse la responsable que desde luego -- se encuentra expresamente prohibida por el primer párrafo del artículo 14 de nuestra Carta Magna y que lleva consigo el evidente perjuicio a los suscritos por cuanto que como lo hemos demostrado, el importe del impuesto

DE LA NOMBRE  
ACUERDO

predial a pagar por el quinto bimestre de 1980 fué de -  
[REDACTED] Y  
la cantidad que por el mismo concepto respecto del sexto bimestre de dicho año se liquida y pretende cobrar -  
es de [REDACTED]

"El concepto de violación que se esgrime en el presente numeral, se hace valer, desde luego, sin perjuicio de la inconstitucionalidad del artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal - que se reclama."

CUARTO.- El juez de Distrito admitió la demanda de que se trata mediante acuerdo de once de junio de mil novecientos ochenta y dos, la que se registró con el número 196/82. Seguido el juicio pronunció sentencia el veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y dos, sobreseyendo en el amparo por una parte y por otra, concediendo la protección federal solicitada.

Las consideraciones en que se apoyó el juzgador para fallar en el sentido en que lo hizo son:

"QUINTO.- El primero de los conceptos de violación que se hicieron valer, debe considerarse fundado y suficiente para conceder el amparo y protección que solicitan, en cuanto se afirma que el artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal es violatorio del principio de legalidad impositiva contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal, por que deja en manos de la autoridad encargada



de aplicar ese precepto la "facultad" de determinar en forma unilateral y arbitraria, la base que es uno de los elementos de todo impuesto."

"En efecto, asiste la razón a los quejosos -- pues el mencionado artículo 66 de la Ley de Hacienda -- del Departamento del Distrito Federal no contiene ni -- expresa detalladamente la forma en que habrá de determinarse el valor catastral de un predio para el efecto de establecer el impuesto correspondiente, pues únicamente establece que ese valor habrá de ser señalado por la Tesorería del Distrito Federal, aproximándose, lo más posible, al valor comercial que tenga el predio en la fecha en que deba entrar en vigor el avalúo correspondiente."

"Lo anterior resulta jurídicamente exacto si se tiene en consideración que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución al disponer que son obligaciones de los mexicanos "Contribuir para los gastos públicos, -- así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que la validez -- constitucional de un tributo depende, que sea proporcional y equitativo y que sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que esté establecido en la ley, pero para entender este último presupuesto, no basta con que el impuesto esté enunciado en la ley, sino que es también necesario que en la propia ley

SECRETARÍA DE LA HACIENDA  
Y DE AGUAYAS

que lo señale, se establezcan con precisión los elementos esenciales de todo impuesto, como son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago, así como la forma, procedimiento y elementos que habrán de tomarse en cuenta para determinar la contribución que en forma particular habrán de corresponder a cada sujeto pasivo. De esta manera entendido, la ley impositiva no debe dar lugar a que las autoridades encargadas de aplicar el precepto fiscal, actúen en forma arbitraria y caprichosa, sino que atendiendo a que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, no puede hacer otra cosa más que ajustarse a las normas jurídicas, permitiendo con ello que el gobernado conozca cual y cómo habrá de desarrollarse la actuación de la autoridad y conozca en consecuencia la forma en que habrá de contribuir para los gastos públicos."

"Ahora bien, en el presente caso, el artículo 66 de la Ley de Hacienda impugnado, al establecer que será la Tesorería quien determine la base del valor catastral (base del impuesto predial en términos del artículo 36, fracción I, de la misma ley) aproximándose lo más posible al valor comercial que tenga el predio en la fecha en que deba entrar en vigor el avalúo correspondiente, es indudable que rompe el principio de legalidad de los impuestos, porque deja en manos de la autoridad encargada de aplicar la ley, la determinación de dicho valor, según su libre arbitrio y sin limitación legal alguna."



56 28

"Para comprender mejor lo antes afirmado, conviene tener en cuenta los siguientes elementos: En primer lugar, que de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Hacienda, que regula el procedimiento de valuación, únicamente se harán valuaciones catastrales mediante peritos en los casos de los artículos 50 y 62 de la propia ley; y segundo, que el artículo 66 en ningún momento dispone que la valuación catastral se realice mediante peritos, ni en los términos de los artículos 74, 75, 76 y 77 siguientes."

"De tal forma que debe concluirse que el artículo 66 impugnado, no requiere para la determinación de la base del impuesto predial, la valuación mediante peritos, ingenieros o arquitectos, sino que deja en manos de la Tesorería del Distrito Federal, la determinación de ese valor."

"Pues si es la propia Tesorería la que establece el valor comercial, teniendo como elementos para hacerlo unos instructivos para las valuaciones, que también la propia Tesorería formula, en términos del artículo 74, primer párrafo, del propio ordenamiento legal, es indudable que esta autoridad exactora puede determinar a su arbitrio el valor catastral de un predio, simplemente modificando el valor comercial que ella puede establecer sin límites en la ley; lo que además repercutirá necesariamente en el monto del impuesto que deberá pagarse, mediante la aplicación de la tarifa corres-

DE LA HACIENDA  
ACUERDO

pendiente sin que el gobernado pueda saber la forma y términos precisos mediante los cuales la autoridad señaló el valor catastral y formuló la liquidación del impuesto predial."

"En consecuencia, debe concederse el amparo y protección solicitados, porque el artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, que es el fundamento para la determinación del valor catastral y por consiguiente de la base y el impuesto predial, resulta inconstitucional por ser contrario a la garantía de legalidad; sin que sea necesario entrar al estudio del segundo concepto de violación que se hace valer, ya que al concederse el amparo por el primero de los capítulos de queja es inútil decidir por los demás, apoyando esta última determinación; la tesis de jurisprudencia número 75, página 129, Octava Parte, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.- Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir por estos".

QUINTO.- Inconformes con la sentencia a que se hace mérito, el Secretario de Gobierno "A" del Departamento del Distrito Federal, en nombre y representación del presidente de la República y por el jefe de dicho Departamento, en su ausencia, el tesorero del Distrito Federal, el subtesorero de Ingresos, el director de Catastro y Contribuciones de la Propiedad Raíz, el jefe -





139

del Departamento de Liquidación y Giro, estas tres últimas dependientes de la propia Tesorería del Distrito Federal, y el procurador Fiscal del Distrito Federal, interpusieron en su contra recursos de revisión. Dichos recursos fueron remitidos al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y su presidente, por acuerdo de treinta de junio de mil novecientos ochenta y tres declaró la legal incompetencia de ese Colegiado y ordenó remitirlos a este alto tribunal.

El presidente de este alto tribunal por acuerdo de fecha nueve de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, admitió únicamente el recurso de revisión que se hizo valer a nombre del presidente de la República y desechó, por improcedentes, los restantes.

El agente del Ministerio Público designado para intervenir en el caso, solicitó que se confirme el fallo recurrido.

El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante proveído de diez de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, notificado el día veinte del mismo mes y año, turnó este asunto al ministro ponente.

La autoridad recurrente, por escritos presentados los días once de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro y veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y cinco, solicitó que se dicte resolución.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, ya que se interpone contra una sentencia pronunciada por un juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se plantea la inconstitucionalidad de una ley emanada del Congreso de la Unión, por lo que se está en la hipótesis prevista por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución federal, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 11, fracción IV bis, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO.- No es materia de la revisión y por tanto debe quedar firme el sobreseimiento contenido en el **resolutive** primero del fallo impugnado, por no haber sido combatido por la parte a quien pudo causar perjuicio.

TERCERO.- La recurrente expresa como agravios los siguientes:

"Unico.- Violación de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, Constitucionales por inexacta aplicación e interpretación, violación de los artículos 66 y 74 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal igualmente por indebida aplicación e interpretación."

Son totalmente inexactas las argumentaciones del C. Juez para llegar a la conclusión de que el - -



artículo 66 reformado de la Ley de Hacienda conculca en perjuicio de la quejosa el principio de legalidad impositiva que establece el artículo 14 y 16 de la Carta -- Magna, por cuanto el precepto reclamado no establece con certeza objetiva todos los elementos esenciales necesarios para determinar la base gravable del impuesto predial."

"Es cierto que para la validez constitucional de un impuesto se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales; primero, que sea establecido -- por una ley; segundo, que sea proporcional y equitativo; tercero que se destine al pago de los gastos públicos; y que si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a los estatuidos por la Constitución, que en relación con el primero de los requisitos, el artículo 31, fracción IV, Constitucional -- contiene el principio de legalidad, al disponer que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que -- deben soportar, sino fundamentalmente, que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuesto impredecibles o a título -- particular, sino que el sujeto pasivo de la relación --

tributaria puede en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad."

"El artículo 36, fracción I, de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, establece que es base del impuesto, entre otra, el valor catastral de acuerdo con el artículo 66 de la propia Ley, se aplicará la base gravable del impuesto predial, por tanto, no puede considerarse que la base gravable del impuesto predial quede al arbitrio de la autoridad, pues el propio legislador señaló en ambas disposiciones ~~la~~ base gravable del impuesto, y sobre la cual la propia autoridad aplicó la tarifa correspondiente que asimismo -- señaló el legislador en el artículo 41 de la mencionada ley."

"Es igualmente inexacto que la determinación de la base gravable se deje al arbitrio de la autoridad exactora, en virtud de que, ni el artículo 66 ni ningún otro de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal se establece la definición de valores unitarios de tierra y construcción que la Tesorería debe -- aprobar para que rija en el ejercicio fiscal correspondiente, ni que tampoco se establezcan las bases o criterios que tal dependencia debe tener en cuenta para fijar lo; ni el procedimiento que está obligación a seguir para tal objeto."



"En efecto, el artículo 66 de la Ley de Hacienda, dispone que el valor catastral que fije a los predios la Tesorería del Distrito Federal, se aplicará como base gravable del impuesto predial en los casos - que así lo disponga el título a que corresponde tal -- precepto, y que dicho valor se fijará cada 4 años, de acuerdo con los valores unitarios de tierra y construcción que la propia Tesorería apruebe para revisar en el - ejercicio fiscal correspondiente, lo anterior, "conforme a las disposiciones de esta ley". Y que para la actualización de los valores catastrales de predios ya valuados, que no hayan sufrido modificaciones no se requerirá valuación de los peritos evaluadores de la Tesorería pues bastará aplicar los nuevos valores unitarios - mencionados."

"Ahora bien, cuando se alegue como violatorio el contenido de un precepto legal, deben examinar todas las disposiciones relacionadas con el precepto impugnado, y no sólo aisladamente el que se impugna, por tanto, de acuerdo con dicho razonamiento, el C. Juez debió haber examinado en su conjunto la legislación aplicable en materia de impuesto predial, y así se observa que, si bien es cierto que el precepto impugnado no establece las bases o criterios que la Tesorería debe tener en cuenta para fijar los valores unitarios, ni el procedimiento que está obligada a seguir para tal objeto, también lo es, - que el legislador no consideró necesario llegar a tal -

VEN DE LA SALUD  
DE ACUERDO

extremo, toda vez que ya había establecido en el artículo 46 fracción IX de la Ley de Hacienda que para los efectos del impuesto predial se considera como valor catastral, el que fija a cada predio la Tesorería del Distrito Federal, y que éste valor deberá aproximarse lo más posible al valor comercial que tenga el predio en la fecha de su avalúo, y además el referido legislador dispuso en el artículo 74 del propio ordenamiento legal, el procedimiento a seguir en relación con las valuaciones catastrales; de ahí que por tanto, tales circunstancias no hayan sido referidas en el precepto que se impugna puesto que como ya se demostró, no lo era necesario, surgiendo entonces la inexacta apreciación del C. Juez. Para afirmar que el artículo 66 reformado de la Ley de Hacienda ~~conculca~~ en perjuicio de la quejosa el principio de legalidad impositiva que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal porque se deja al arbitrio de la Tesorería del Distrito Federal, la determinación de la base del impuesto predial, y porque no se establece con certeza objetiva todos los elementos necesarios para determinar la base gravable del impuesto predial."

"Tiene perfecta aplicación a lo anteriormente expuesto, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en el resumen publicado en el informe de 1973, Pleno, página 348, que dice:"

"La determinación del monto de los impuestos



debe ser hecha en la misma ley que los establece o -- cuando menos ésta debe fijar las bases generales necesarias para que las autoridades encargadas de su aplicación, puedan hacer fijación del monto del impuesto".

"Por otra parte, carecería igualmente de objeto que en el precepto impugnado se definiera el término de valores unitarios, toda vez que tal expresión, atendiendo al significado de sus palabras <sup>es</sup> sin necesidad de explicación alguna el costo por unidad. Ahora que, para referirse al valor unitario catastral, -- hay que apreciar primero lo que es valor catastral de un predio, lo cual se encuentra definido como ya se -- dijo por el artículo 45, fracción 18, de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, luego en -- tonces, el valor unitario catastral de un predio lo se -- rá el valor por metro cuadrado del mismo y está formado del valor de un metro cuadrado de terreno, más el -- valor de metro cuadrado de construcción, considerando -- que el valor de este último está dividido entre el to -- tal de metros cuadrados que contiene el predio."

Para demostrar que la Tesorería del Distrito Federal, tiene establecido todo un procedimiento para la fijación del valor unitario de tierra, ello en cumplimiento de lo que la misma Ley de Hacienda en su artículo 74 y demás disposiciones relativas y para rebatir lo afirmado por el C. Juez, en cuanto a que tampoco se establecen las bases o criterios que dicha Tesorería --

4 DE LA HACIENDA  
DE ACUERDO

debe tener en cuenta para fijar la base del impuesto predial, a continuación se expresan las siguientes consideraciones:"

"Existe a la fecha una comisión de peritos valuadores, todos ellos arquitectos, ingenieros o pasantes de estas profesiones, con sólida preparación profesional y acreditada experiencia en valores catastrales y comerciales, dicha comisión está compuesta de 16 elementos nombrados por el C. Director de Catastro o Impuesto Predial con la autorización del C. Tesorero del Distrito Federal, de la cual es coordinador el C. Subdirector Técnico y Controlador del C. Jefe del Departamento Técnico, estas dos últimas autoridades dependientes de la Dirección de Catastro o Impuesto Predial y dichos valuadores fijan los valores catastrales de tierra en las 16 Delegaciones Políticas en las que se divide el Distrito Federal, de acuerdo a los siguientes pasos:

"a).- Obtención del plano de conjunto de la región catastral en estudio, o es su caso, los planos del poblado, de la zona o de las calles en que deben fijarse valores catastrales."

"b).- Datos objetivos; recorrido cuidadoso de la región, fraccionamiento o zona para recabar datos sobre el destino predominante de los predios, comerciabilidad, dimensiones, servicios municipales, sección transversal de calles, vialidad, tránsito, importancia relativa de las calles o avenidas que la rodean o circulan, -





altura de sus edificios, clasificación de tipos de resi  
dencia, restricciones de uso de predios, influencia por  
proximidad de zonas deprimentes (ciudades perdidas, cin-  
turones de miseria, barrancas), nuevas áreas habitacio-  
nes o comerciales u obras municipales de importancia --  
(fraccionamientos, centros comerciales, escuelas, merca-  
dos, obras de infraestructura) y completando esta inves-  
tigación se toman fotos de esquina o puntos que se con-  
sideran importantes y que, en un momento dado, ayuden a  
justificar el valor asignado."

"c) Datos subjetivos: información sobre los -  
valores de compraventa en el mercado, obtenidas directa-  
mente de las ofertas anunciadas o bien, recurriendo a -  
los anuncios periodísticos, a la información telefónica  
o a la entrevista personal; investigación sobre los va-  
lores consignados en los avalúos bancarios de los que -  
por preceptos legales se requiere el pago del impuesto  
sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, y que  
se presentan en la Tesorería del Distrito Federal."

"d).- Es trabajo complementario de los peri-  
tos valores, la fijación del lote tipo predominante  
en cada zona o manzana de la clasificación catastral.-  
Por experiencias obtenidas a través de los años, el lo-  
te tipo o predio tipo es aquél que predomina en dimen-  
siones de frente y fondo en relación de uno a tres. El  
valor unitario obtenido para que una calle es únicamen-  
te aplicable para el predio que reúne las condiciones -

del lote tipo, ya que son sujetos de méritos los predios que difieren en dimensiones de menor frente a mayor fondo, irregularidades perimetrales o irregularidades verticales (pendientes, ascendientes o descendientes con respecto al nivel de la calle excavaciones o lomeríos). Se modifica, asimismo, el valor unitario de calle, pero en este caso superándolo, cuando el predio se ubica en esquina con dos o más frentes, ya que el predio sufre un incremento en su valor."

"El valor unitario catastral de construcción se obtiene considerando por separado cada uno de los elementos que interviene en la construcción. Al efecto, en el instructivo para la valuación de predios en el Distrito Federal obra una tabla de valores de construcciones que comprende dos grandes grupos: las construcciones antiguas, que se consideran de tres tipos de la A a la C., y de las modernas entre los tipos de la D a la I. En esta tipificación están comprendidas las edificaciones predominantes en el Distrito Federal, ya que abarcan desde las casas modestas y con techos de bóveda corriente, hasta los edificios de 10 niveles con cimentación y estructura de concreto. Por otro lado, existen construcciones que no es posible incluir dentro de la tipificación señalada, ya que individualmente resultan singulares y en estos casos el perito tiene que efectuar el avalúo directo con análisis de costos individuales. Estas construcciones son denominadas comerciales y en --



62 44

ellas están comprendidas: Grandes fábricas, templos o - iglesias, centros deportivos, cines, gasolineras, grandes hoteles, edificios de más de 10 niveles y obras arquitectónicas creadas por un capricho de su constructor."

"De lo anterior puede verse, que los valores catastrales no están determinados en una forma anárquica, puesto que cumpliendo con lo establecido en la fracción IX del artículo 46 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, la determinación de estos valores está limitada a no rebasar el valor comercial de los mismos, observando desde luego para ello el procedimiento establecido por el artículo 7 de la referida Ley de Hacienda."

"Así pues, y en virtud de todos los razonamientos anteriores, es de verse que el C. Juez no los tomó en cuenta, por lo que es improcedente la concesión del amparo de la Justicia Federal otorgado."

CUARTO.- Son fundados los agravios, aducidos por la recurrente.

Previo al análisis de los agravios es pertinente llevar a cabo una breve reseña de lo que este alto tribunal ha resuelto en relación a las diversas reformas que ha sufrido el numeral 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.

En efecto, el artículo 66 de la referida ley, - reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de mil novecientos - setenta y cuatro, - rigió del primero de enero de mil --



novecientos setenta y cinco, según el artículo primero de los transitorios, al último de diciembre del mismo año. El citado numeral rezaba de la siguiente manera:

"ARTICULO 66.- El valor catastral que fije a los predios la Tesorería del Distrito Federal, conforme a las disposiciones de esta ley, se aplicará como base gravable del impuesto predial en los casos en que así lo dispone el presente título. Este valor se fijará cada dos años, de acuerdo con los valores unitarios de tierra y de construcción que la propia Tesorería apruebe para regir en el ejercicio fiscal correspondiente."

"Para la actualización bienal de los valores catastrales de predios ya valuados, que no hayan sufrido modificaciones, no se requerirá valuación de los peritos valuadores de la Tesorería, pues bastará aplicar los nuevos valores unitarios que menciona el párrafo anterior."

"Cuando los predios deban valuarse por primera vez en los términos de este título, o hayan sufrido modificaciones, los avalúos se harán con la intervención de peritos valuadores conforme a lo previsto en este mismo título."

Respecto de la reforma citada, este alto tribunal sustentó criterio declarándolo inconstitucional, según puede verse en la jurisprudencia número dos que aparece publicada a fojas cuatrocientos ochenta y dos, del informe de labores relativo al año de mil novecientos setenta y seis, primera parte, que se lee bajo el rubro de: "PREDIAL. EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRI-



TO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1974, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE CONSAGRA EL ARTICULO 31, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION FEDERAL, EN CUANTO AL SISTEMA DE VALUACION DE PREDIOS QUE ESTABLECE PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO."

Ahora bien, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, apareció una nueva cuenta reformado el numeral en comento, el cual entró en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos setenta y seis, de acuerdo al artículo primero de los transitorios.

Dicho numeral a la letra decía:

"ARTICULO 66.- Cuando el impuesto deba causarse sobre la base de valor catastral, éste será determinado por la Tesorería del Distrito Federal y deberá aproximarse, lo más posible, al valor comercial que tenga el predio en la fecha en que deba entrar en vigor el avalúo correspondiente."

La reforma ha sido analizada por este Pleno, - al resolver los amparos en revisión 1711/83, promovido por "Unión de Colonos Santa Cruz de Istacalco e Iztapalapa, - Zona Expropiada, Campamento Dos de Octubre", asociación - civil, por unanimidad de diecisiete votos y amparo en revisión 6285/82, promovido por Héctor Emilio Balandrano Campos, por igual votación, según aparece publicado a fojas trescientos sesenta y cinco y sesenta y seis, del informe de labores al terminar el año de mil novecientos ochenta y cuatro, y cuya sinopsis de la tesis es del tenor --

siguiente: "PREDIAL. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1975."

El numeral en comento vuelve a ser modificado según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, de acuerdo al artículo primero de los transitorios, y queda del siguiente tenor:

"ARTICULO 66.- Cuando el impuesto deba causarse sobre la base del valor catastral, éste será determinado por la Tesorería del Distrito Federal aplicando los valores unitarios tanto para tierra como para construcción, que apruebe la institución con el auxilio de la Comisión Asesora de Valores Catastrales y aplicando los instructivos para las valuaciones."

Sobre dicha reforma este Tribunal en Pleno ha resuelto en tres ejecutorias que el precepto impugnado es inconstitucional, tales ejecutorias son: Amparo en revisión 1751/82, promovido por Magdalena Castillo Rodríguez, resuelto en sesión de quince de marzo de mil novecientos ochenta y tres, por unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Rivera Silva, Langley Martínez, Díaz Infante, Pavón Vasconcelos, Rebollo, Rodríguez Roldán, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, Salmorán de Tamayo, Sánchez Vargas, Del Río, Calloja García, León Orantes y presidente Iñárritu.



✓ 46

Amparo en revisión 1754/82, promovido por Sergio A. Sánchez Castellanos, resuelto en sesión de cinco de julio de mil novecientos ochenta y tres, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, - Pavón Vasconcelos, Rebolledo, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Sánchez Vargas, Del Río, Calleja García, León Orantes, Olivera Toro y presidente Iñárritu.

Amparo en revisión 8926/82, promovido por Concepción Hernández Santiago, resuelto el veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, por unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Rangel Martínez, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, Calleja García, León Orantes, Olivera Toro y presidente Iñárritu.

En el caso a estudio la reforma que se cuestiona es la que sufrió el artículo 66 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, misma que se publicó el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos setenta y seis y que rigió hasta el último de diciembre de mil novecientos ochenta; el primer acto de aplicación es de veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta, notificado a la quejosa el veinte de mayo de mil novecientos -

ochenta y dos (fojas 11 y vuelta del amparo).

Sobre el particular, como se señaló en párrafos precedentes existen dos antecedentes (A.R. 1711/83 y A.R. 6285/82).

En las relatadas condiciones procede entrar al estudio de los agravios aducidos.

El análisis del multicitado artículo 66 debe realizarse conjuntamente con los diversos artículos 68, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Hacienda mencionada, que estuvieron vigentes en la época en que se dieron los actos de aplicación reclamados, los cuales establecían lo siguiente:

"ARTICULO 68.- La valuación catastral se hará ~~separadamente~~ para la tierra y para las construcciones permanentes. La suma de los valores resultantes será el valor catastral del predio, como lo establece el artículo 66."

"ARTICULO 74.- Las valuaciones catastrales a que se refiere esta sección se harán con arreglo a las disposiciones de la presente ley y a los instructivos que la Tesorería del Distrito Federal expida al efecto, los que se publicarán en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal."

"La Dirección de Catastro e Impuesto Predial de la Tesorería del Distrito Federal ordenará, por escrito, las valuaciones catastrales que se practicarán por peritos que deberán ser ingenieros, arquitectos o pasantes de estas profesiones y que se identificarán con credencial oficial."





65 47

"ARTICULO 75.- Los valuadores deberán presentarse en día y hora hábiles en el predio que deba ser objeto de la valuación y mostrarán a los ocupantes tanto la orden para la valuación como su credencial."

"Si los ocupantes se opusieran en cualquier forma a la valuación, el valuador informará a la Tesorería del Distrito Federal a efecto de que requiera por escrito a los ocupantes para que permitan la práctica de la valuación."

"ARTICULO 76.- Si no obstante el requerimiento a que se refiere el artículo anterior, los ocupantes del predio no permitiesen la valuación, ésta se hará de todas maneras con base en los elementos de que se dispongan y sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes."

"ARTICULO 77.- Los valuadores formularán los avalúos catastrales en las formas que apruebe la Tesorería del Distrito Federal."

"Un extracto del avalúo y la liquidación del impuesto se notificará a los interesados."

Ahora bien, del análisis de dichos preceptos, los que deben examinarse relacionados con el precepto impugnado, se llega a la conclusión de que el artículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal impugnado no es violatorio de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se toma en consideración que no existe violación a las garantías de audiencia, seguridad jurídica y legalidad en los impuestos.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución general de la República establece la necesidad que las cargas tributarias para los gobernados se encuentren previstas en una ley, lo cual significa no sólo que el acto creador del impuesto deba emanar del Poder Legislativo, sino que se consigne, de manera expresa en la ley que establece el tributo, los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcances de la obligación tributaria; esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligación, así como el objeto, la base y la cantidad de la prestación, de tal manera que a las autoridades exactoras no les quede ningún margen de discrecionalidad en cuanto a dichos elementos a fin de evitar arbitrariedades y lograr que sus funciones se constriñan a aplicar, en los casos concretos, las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad por el Poder Legislativo, para que así el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos. Dicho en forma breve, la arbitrariedad de la imposición y la imprevisionabilidad de las cargas tributarias son las que deben considerarse contrarias a la fracción IV del artículo 31 constitucional.

Por último, aunque el artículo 66 mencionado señala que la determinación del valor catastral corresponde a la Tesorería del Distrito Federal y que debe aproximarse lo más posible al valor comercial vigente -



en la fecha en que entre en vigor el avalúo del predio, los artículos del 63 al 77 de la propia ley impugnada, que resultan aplicables a lo dispuesto en el artículo 66 que determina la realización de los avalúos periciales, señalan el procedimiento que debe seguirse para la verificación de los avalúos catastrales a que se refiere precisamente el artículo 66 de dicha ley. Por tanto, resulta que no se deja al arbitrio de la autoridad la fijación del valor catastral de un predio, sino que, por el contrario, se le sujeta a la realización de avalúos periciales con intervención de los interesados y obligación a ajustarse al valor comercial vigente en la fecha en que debe verificarse el avalúo que de acuerdo con las disposiciones mencionadas no es de carácter general sino individual.

En tales condiciones procede, en lo que es materia de la revisión, revocar el fallo impugnado, para en su lugar, negar el amparo solicitado por los quejosos.

QUINTO.- Como de conformidad con el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo y tomando en cuenta que los agravios que se han estudiado se consideran fundados, tendrá que examinarse el segundo concepto de violación, cuyo análisis omitió el juez de Distrito; pero, como se advierte también que el quejoso alega en el mismo violaciones a la garantía de legalidad, este alto tribunal se encuentra impedido legalmente para analizar tal cuestión y debe reservarse jurisdicción

a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del --  
Primer Circuito, con fundamento en los artículos 92, --  
segundo párrafo, de la Ley de Amparo, 72. bis, fracción  
III, inciso a), del capítulo III bis y 72, fracción I, --  
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en  
los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, --  
inciso a), de la Constitución federal; 84, fracción I, --  
inciso a), 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Queda firme el primer punto resolu-  
tivo de la resolución sujeta a revisión.

SEGUNDO.- En lo que es materia de esta revi-  
sión se revoca la sentencia que se revisa.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara --  
ni protege a Jorge Correa M., y a Adela Lapuente de Co-  
rrea, en contra de las autoridades mencionadas en el --  
resultando primero de esta resolución, respecto al ar-  
tículo 66 de la Ley de Hacienda del Departamento del --  
Distrito Federal, según reforma publicada en el Diario  
Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre  
de mil novecientos setenta y cinco.

CUARTO.- Para los efectos de su competencia, --  
se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en Mate-  
ria Administrativa del Primer Circuito en turno, al --  
que deberá remitirse copia autorizada de esta ejecu-



67 249

toria y el juicio de amparo correspondiente.

OHP/mem.

Notifíquese y cúmplase.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia -  
de la Nación en Pleno por unanimidad de diecinueve votos  
de los señores ministros: López Aparicio, López Contreras,  
Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Casta-  
ñón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, De Silva  
Nava, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de -  
Velasco, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, Del Río Ro-  
dríguez, Ortiz Santos, Schmill Oadónnez, Olivera Toro y -  
presidente Iñárritu.

Firman los CC. Presidente, Ministro ponente con  
el C. Secretario General de Acuerdos que da fe.

EL PRESIDENTE.

JORGE INARRITU

EL MINISTRO PONENTE

MANUEL GUTIERREZ DE VELASCO.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. J. JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ

OHP/mem.

Cotejó:

10 DIC. 1985

En ..... y Por medio de lista  
notificó la resolución anterior a las partes y al Ministerio Público  
Federal. Conste.

